



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0196/2017

FECHA: 19 de diciembre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación con número de referencia RT/0196/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta, la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito registrado el 23 de abril de 2017 en el Ayuntamiento de Valmojado -Toledo-, la hoy reclamante, tras poner de manifiesto que el 26 de noviembre de 2012 se adjudicó el contrato de gestión mediante concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado a favor de Hidrogestión S.A señalando el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia que el importe o canon de adjudicación es de 260.00 euros y 0,06 euros/metro cúbico de canon variable, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno - desde ahora, LTAIBG-, planteó la siguiente la siguiente solicitud de acceso a la información a dicha Corporación municipal:

Quiero que me envíen carta donde informen de la cantidad de metros cúbicos entre los meses de diciembre de 2016 y abril de 2017 (ambos inclusive) que la empresa Hidrogestión S.A haya pagado al Ayuntamiento en concepto del precitado canon variable, con el detalle de cuantos metros cúbicos ha pagado cada uno de estos meses en concepto de dicho canon.

Transcurrido el plazo aludido en el artículo 24.2 de la LTAIBG sin haber obtenido respuesta a su solicitud, el interesado la entiende desestimada por silencio

ctbg@consejodetransparencia.es



administrativo y, en consecuencia, a través de un escrito registrado en esta Institución el 13 de junio de 2017 interpone una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG.

2. El 14 de junio de 2017 por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo se dio traslado del expediente por una parte, a la Dirección de la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conocimiento y, por otra parte, al Ayuntamiento de Valmojado a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Transcurrido el plazo reseñado en el párrafo anterior sin haber recibido alegación alguna, por parte de este Consejo se reiteró sin que en la fecha en la que se dicta la presente resolución se haya recibido ninguna alegación en el expediente de referencia elaborada por el citado Ayuntamiento.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el



correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. Al igual que se ha llevado a cabo en nuestra anterior Resolución con número de referencia RT/0195/2017, de 19 de diciembre, con carácter preliminar hemos de centrar nuestra atención en el marco normativo regulador de la materia sobre la que versa la originaria solicitud de acceso a la información que ha sido desestimada por silencio administrativo por el Ayuntamiento de Valmojado.

Nuestro análisis de Derecho Positivo debe partir, necesariamente, del hecho que el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -desde ahora, LrBRL- prevé que los municipios ejercerán competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otros ámbitos, en el relativo al «[a]bastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales». Asimismo, el artículo 26.1.a) de la propia LrBRL dispone que en todos los municipios ha de prestarse, con la naturaleza de servicio mínimo obligatorio según se proclamaba antes de la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, los servicios de “abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado”.

En desarrollo de la previsión contenida en el citado artículo 25.2.c) de la ley básica de régimen local, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 7 aborda la regulación de las concretas competencias propias que corresponden a las administraciones locales entre las que aparecen, a los efectos que ahora importan, las siguientes: «la prestación del servicio de distribución domiciliaria de agua potable y de alcantarillado. Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor» -letra a)-, la «elaboración y aprobación de los reglamentos de los servicios de su competencia, con arreglo a las prescripciones de esta Ley» -letra c)-, la «aprobación y aplicación, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio de su competencia» -letra d)-.

La prestación de este servicio de abastecimiento de agua por parte d un ayuntamiento puede efectuarse por cualquiera de las formas de gestión de



servicios públicos a las que alude el artículo 85 de la LrBRL. De este modo, según se desprende de la originaria solicitud de acceso a la información planteada por la hoy recurrente, por acuerdo del pleno municipal de fecha 26 de noviembre de 2012, se adjudicó el contrato de gestión, mediante concesión, del servicio público de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado -Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n. 290, de 19 de diciembre de 2012-. A estos efectos, cabe recordar que, en términos generales, el canon de la concesión en el servicio de abastecimiento de agua potable es la cantidad resultante de deducir a los ingresos que percibe la empresa concesionaria -las tarifas que abonan los usuarios-, los gastos para la prestación del servicio más el correspondiente beneficio industrial contemplado en su oferta y que puede variar en función de la inclusión en los pliegos de contratación de alguna especificidad, como sucede en el caso que ahora nos ocupa, que se alude a un canon variable en función de una relación entre euros y metro cúbico.

De este modo, cabe advertir que el objeto sobre el que versa la originaria solicitud de acceso a la información desatendida por la administración municipal se trataría de información de naturaleza económica presupuestaria.

4. Partiendo de la premisa anterior, cabe advertir que el ejercicio del derecho de acceso a la información se ha configurado por el legislador básico de transparencia, así como por el legislador autonómico de desarrollo, como un derecho de amplio espectro. Esta configuración ha sido reiterada por los Tribunales de Justicia que ya han tenido ocasión de pronunciarse en diferentes ocasiones en el sentido de que el acceso a la información debe entenderse en un sentido amplio y que las restricciones al mismo deben ser excepcionales. De este modo, a mero título de ejemplo, la Sentencia 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 5 tras señalar que la LTAIBG «en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública» sostiene que «la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado».

Por su parte, la Sentencia 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 afirma que «[e]l derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. [...] Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que



el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia».

En este, tal y como se desprende de su preámbulo, hay que recordar que la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma. Mientras que, por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En el presente caso, no cabe albergar duda alguna que la materia sobre la que se solicita el acceso a la información se trata de “información pública” a los efectos de la LTAIBG. En primer lugar, se trata de información que posee el Ayuntamiento de Valmojado en el ejercicio de sus funciones si atendemos, entre otros, a los artículos 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Mientras que, en segundo lugar, se trata de información elaborada por una Corporación municipal, sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la LTAIBG a tenor de lo dispuesto en su artículo 2.1.a).

De acuerdo con ello, y dado que no se ha alegado la concurrencia de ninguna causa de inadmisión del artículo 18 ni tampoco ninguno de los límites del artículo 14 de la LTAIBG, hay que concluir estimado la Reclamación planteada.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR en cuanto al fondo del asunto la Reclamación presentada por tratarse de información pública en poder de un sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Valmojado -Toledo- a que en el plazo máximo de quince días proporcione a [REDACTED] la información solicitada y no satisfecha, remitiendo a este Consejo en igual plazo copia de la información trasladada a la reclamante.



De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
P. V (ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO 919/2014)

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Francisco Javier Amorós Dorda